



Mane Cárcamo

Si hay alguien que conoce de cerca la formación y desafíos de Carabineros es Daniel Soto Muñoz. Abogado especializado en políticas de seguridad, derechos humanos y ética corporativa, fue coronel de la institución y durante 26 años ejerció como profesor de derechos humanos de los futuros policías.

“Renuncié voluntariamente a Carabineros en 2019, y en 2020 organicé actividades para analizar el estallido social con académicos nacionales e internacionales. Eso pudo generar incomodidad, pero las diferencias no eran personales, sino estructurales: la pregunta era quién estaba desordenando el gallinero. Al mismo tiempo, manifesté discrepancias conceptuales y jurídicas con las jefaturas de la época, y estaban en su derecho de no renovar mi contrato como profesor”, dice.

Defensor de la función policial, crítico de los altos mandos, varios de sus cuestionamientos apuntan a los criterios de formación de la policía uniformada. Hoy Soto sigue vinculado a los temas de seguridad pública como consultor de la Relatora Especial para el Derecho de Reunión Pacífica de Naciones Unidas y asesor en relaciones internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Existen problemas en el acompañamiento de carabineros”

—Hay preocupación por la salud mental en Carabineros ¿Qué factores crees que explican el incremento de licencias médicas que pasaron de 86.892, en 2017, a 117.696 en 2023? En 2022 hubo un peak de 135 mil licencias.

—Me parece comprensible el aumento de las licencias médicas en un contexto de crisis de seguridad, ya que el trabajo policial siempre ha sido complejo. La carga horaria elevada dificulta que los carabineros concilien su vida profesional con la familiar. En los últimos tiempos, la falta de personal suficiente para cubrir las necesidades diarias ha incrementado las presiones internas, sociales y políticas por mejorar las estadísticas. Las condiciones del clima organizacional son extremadamente complejas, lo que genera enfermedades relacionadas con la presión laboral, como el trastorno de estrés posttraumático, un tema poco estudiado en Latinoamérica. En consecuencia, se produce una disminución de efectivos en las calles y un deterioro de las condiciones laborales, lo que incrementa las enfermedades derivadas del trabajo. En Chile, persiste el estigma de que quien enfrenta un problema de salud mental es una persona con debilidades o con falta de competencia profesional, lo que contribuye a que no se vea con buenos ojos que alguien requiera una licencia psiquiátrica.

—En Carabineros eso debe ser peor, ¿no?

—Sí, en la cultura institucional de Car-



FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO ASTORGA / ATON

Daniel Soto:

“Hay menos seguridad cuando los carabineros deben preocuparse de llegar a fin de mes”

El coronel (r) de Carabineros y académico de la U. Adolfo Ibáñez, dice que “la gente pide más seguridad, pero hay menos, y aunque hay mucho debate sobre el tema, no hay un apoyo práctico y real al carabinero en la calle”.

rabineros es mucho más complejo, porque existe la percepción de que una persona con licencia psiquiátrica carece de idoneidad profesional. Además, el sistema de prestaciones médicas no favorece el cuidado de la salud mental ocupacional. No existe un mecanismo que se preocupe de manera constante por el bienestar psicológico de los carabineros. Por otro lado, en general, en la administración pública se acepta que una persona puede tener un número determinado de días de licencia psiquiátrica en un periodo de dos años sin que esto afecte su calificación o permanencia en la institución. Sin embargo, en Carabineros persiste la idea erró-

nea de que las licencias por salud mental no son atribuibles a actos del servicio. Si un carabinero sufre una lesión física durante sus labores, esta se reconoce como consecuencia directa del trabajo y no afecta su evaluación anual. Pero las enfermedades mentales, al tener un desarrollo más difuso y transversal, no se consideran parte de las condiciones laborales.

—¿Qué ocurre frente a esos casos?

—Esto genera que la responsabilidad de mejorar y recuperarse recaiga exclusivamente en el funcionario afectado. Si acumula muchas licencias psiquiátricas —por ejemplo, 180 días en dos años—, puede ser dado de baja por incapacidad

física, sin considerar que esa incapacidad podría ser consecuencia del estrés y desgaste emocional inherente a la labor policial. O tienes que optar por ir a un psiquiatra particular de tal manera que en tu ficha institucional no quede registro de que fuiste psiquiatra. Es fuerte.

—En relación al dramático caso de Dante Moena, el joven carabiniere que se quitó la vida en La Moneda, ¿crees que faltó acompañamiento psicológico o emocional?

—No sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero podría especular que, además de ser una tragedia extremadamente dolorosa, detrás de la muerte de este carabiniere hay desafíos sistémicos que deben corregirse. Existen problemas en la formación y el acompañamiento que reciben los carabineros. Normalmente, la etapa de formación es breve y se destina mucho tiempo a la cultura organizacional militar, más que a los elementos propios de la labor policial. Esto genera tránsitos abruptos entre la escuela y la función policial que deben desempeñar en la práctica. Ahí radica un problema de acompañamiento. El carabiniere Moena, en particular, había egresado en 2023 y en 2025 ya cumplía funciones de gran relevancia, como la seguridad en La Moneda. Esto evidencia la necesidad de que los carabineros tengan un entrenamiento y una práctica en tareas policiales mucho más amplia que la que reciben actualmente.

—Hace unas semanas, un carabiniere resultó gravemente herido en un accidente mientras trabajaba como conductor de taxi, y el año pasado, un sargento falleció en las afueras del teatro Caupolicán mientras desempeñaba funciones como guardia privado. Estas prácticas están prohibidas, pero parece que a veces se pasa por alto cuando ocurren. ¿Por qué crees que siguen sucediendo?

—Eso es un síntoma de una enfermedad complejísima que afecta a Carabineros. Todos los funcionarios saben que su labor implica dedicación exclusiva y que, aunque la Constitución permite a las personas desarrollar actividades económicas, existen ciertas incompatibilidades con la función pública. Por ejemplo, no pueden realizar actividades durante su horario de servicio ni desempeñar labores que ellos mismos deben fiscalizar, como conducir un taxi o administrar una botillería. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que, agotados después de extensas jornadas laborales, muchos carabineros buscan un segundo trabajo para poder subsistir. Si extenúas a un policía en su servicio y este tiene otro trabajo, las condiciones físicas y anímicas en las que llega a desempeñarse son paupérrimas. En consecuencia, hay menos seguridad pública cuando los carabineros deben preocuparse de cómo llegar a fin de mes.

“Estamos en una espiral de abandono de las policías”

—En 2019, Carabineros pasó de ser



En Carabineros existe la percepción de que una persona con licencia psiquiátrica carece de idoneidad profesional”.



Si extenúas a un policía en su servicio y este tiene otro trabajo, las condiciones físicas y anímicas en las que llega a desempeñarse son paupérrimas”.

una institución muy valorada a enfrentar un fuerte rechazo social. ¿Crees que hoy las autoridades no son conscientes de los traumas que pueden haber vivido los carabineros en los últimos años?

—No. Mi impresión es que gran parte del costo de la seguridad pública lo asume el funcionario de Carabineros. Son ellos quienes deben trabajar jornadas extenuantes, renunciar a ver a sus familias o a tomar vacaciones porque el servicio los necesita. Deben estar disponibles en horarios inusuales y cumplir turnos extremadamente prolongados, asumiendo en carne propia el peso de mantener el orden y la seguridad en las calles. Si te fijas, cuando las autoridades anuncian mejoras en seguridad pública, suelen decir: “Vamos a aumentar la cantidad de carabineros, más vehículos, más equipamiento”. Pero rara vez dicen: “Vamos a mejorar las condiciones laborales de los carabineros”, o “vamos a dignificar su trabajo con mejores remuneraciones”. Si revisamos la evidencia legislativa o política de los últimos diez años —incluido el estallido—, vemos que la discusión sobre seguridad pública se enfoca en la corrupción o los altos índices de violencia, pero casi nunca aborda las condiciones en las que trabajan los carabineros. Y esto no es solo un problema de falta de debate, sino de percepción: se pasa por alto que, para que una organización policial funcione correctamente, es esencial que sus integrantes trabajen en óptimas condiciones.

—¿Cómo afectó en la autoestima o en la moral de Carabineros el estallido?

—Todos los fenómenos sociales que generan descrédito para las organizaciones policiales tienen un alto impacto en sus integrantes. El caso Catrillanca, el caso Huracán, el fraude patrimonial, los gastos reservados y las acusaciones generalizadas de violencia durante el estallido tienen un impacto directo en quienes visten el uniforme y deben dar la cara frente a la ciudadanía. En términos sociológicos, las personas tienden a generalizar sus experiencias: si ven actitudes correctas en un carabiniere, asumen que todos son iguales —cultos, pulcros, correctos—. Pero si tienen malas experiencias, la percepción se invierte: todos los carabineros son corruptos, violentos o indiferentes. Esta uniformidad en la percepción tiene que ver con la naturaleza de las culturas organizacionales jerárquicas, donde los comportamientos individuales se proyectan sobre toda la institución. Por eso, cuando una organización pierde legitimidad social, ya sea por casos de corrupción, malas prácticas o falta de eficacia, la carga del descrédito recae sobre todos sus integrantes, afectando tanto su imagen pública como su bienestar emocional.

—¿Cómo se gestiona la comunicación interna dentro de Carabineros cuando ocurren situaciones complejas que impactan a la institución?

—La afectación aumenta considerablemente cuando la comunicación interna es deficiente. Las organizaciones tien-

den a ser lentas en la transmisión de información a su personal, lo que genera que los carabineros se enteren de lo que ocurre dentro de la institución más por la televisión que por información oficial proveniente de la propia organización, lo que deja al carabiniere en la calle enfrentando el abucheo de la gente sin tener respuestas claras sobre lo que está sucediendo. Este vacío de información genera desmotivación, lo que influye directamente el desempeño de los carabineros. Un carabiniere desmotivado puede dejar de aplicar la ley de manera adecuada, y un oficial desmotivado pierde la rigurosidad en la supervisión que debe ejercer. Las situaciones complejas que el país ha vivido impactan de manera directa en la percepción pública de los carabineros, afectando la legitimidad de la institución y la manera en que la sociedad obedece a la policía.

—En los últimos años se ha hablado de una reforma a la institución.

—En este momento, estamos en una espiral de abandono de las policías. La gente pide más seguridad, pero hay menos, y aunque hay mucho debate sobre el tema, no hay un apoyo práctico y real al carabiniere en la calle. Se habla de la reforma policial, pero nunca se les comunica a los carabineros si eso afectará su bolsillo, su carrera, si les hará el trabajo más difícil o más fácil, o si el enfoque en los derechos humanos contribuirá a un mejor desempeño, mayor eficacia en su labor y un mayor respeto por los derechos de la población, generando más legitimidad o no. Los carabineros, en ese sentido, se encuentran atrapados en el medio de un debate, pero en la práctica hay un total abandono por parte de las autoridades de los tres poderes del Estado.

—¿Cómo evalúas la relación de este Gobierno con Carabineros? El Presidente Boric fue muy crítico de la institución antes de asumir.

—Haría la siguiente distinción. Por un lado, está el discurso político y activista, y por otro, la construcción de las políticas públicas. Cuando los actores del activismo pasan a formar parte de la construcción de políticas públicas, el discurso inevitablemente debe cambiar; eso siempre ocurre, sin importar lo que hayan dicho antes. Estar del lado de lanzar piedras y gritar insultos no es lo mismo que estar del lado de la construcción de políticas públicas, donde el enfoque cambia radicalmente. Por eso da lo mismo lo que digan unos u otros ya que, una vez que tienen el poder y la obligación de hacerse cargo del orden y la seguridad pública, no tienen otra opción. Donde sí se nota un cambio es en la conducción estratégica de las organizaciones. La conducción del general Araya es bastante precisa en cuanto a sus intereses. Es un general que está preocupado por los carabineros en su función y por dar eficacia al trabajo de seguridad pública. En contraste, la participación del general Yáñez fue diferente, especialmente en su relación con el mandatario, ya que fue más política que técnica.